

Plaza Pública para la edición del 8 de octubre de 1996
Debate y petroquímica
por miguel ángel granados chapa

Varias veces ha deplorado el Presidente Zedillo la falta de un debate riguroso sobre la política económica de su gobierno. Es su modo, no demasiado original ni ingenioso, de trasladar a otros la responsabilidad sobre sus propios actos y los del gobierno que encabeza: son los autores y/o ejecutores de tal política los que han actuado de modo unilateral, al son del lema excluyente “no hay más ruta que la nuestra”. Para hacerlo posible, se finge que no hay propuestas alternativas, o se las descalifica de antemano atribuyéndoles falta de rigor, sin precisar en qué consiste.

De haber voluntad para discutir, el propio gobierno podría organizar un debate formal. Pero ya ahora mismo tal discusión sería dable con sólo que el gobierno ofreciera respuesta, con el rigor que demanda y del que alardea, a propuestas públicas sobre su política económica en general o sobre aspectos específicos de ella, que circulan desde hace tiempo y que el gobierno prefiere pasar por alto.

H aquí algunos ejemplos de la sordera gubernamental, que no ha habido otólogo capaz de remediar. No me refiero a las posturas asumidas por partidos políticos, señaladamente el PRD, porque se las puede descalificar a priori suponiendo que están regidas más por criterios propagandísticos y políticos que por fundamentos teóricos y técnicos que les den solvencia (aunque no vemos cómo sea posible separar lo uno de lo otro, como lo prueban los

planteamientos mismos del gobierno, donde los tres factores, el propagandístico, el político y el teórico-técnico están indisolublemente presentes siempre).

El director de la facultad de Economía de la UNAM, Juan Pablo Arroyo, que no pertenece a las corrientes populista o marxista a las que se carga el desprestigio asestado a dicha institución, fue requerido para hacer aportaciones al Plan Nacional de Desarrollo, presentado en mayo de 1995. Todo lo que siguió a la formulación de un extenso documento al respecto fue un cortés pero estéril acuse de recibo, acaso porque la política planteada implicaba una herejía, pues propone llevarla adelante “sin costo social”.

Creo que ni aquel gesto de buena educación correspondió a otro documento (no solicitado ni referido a dicho Plan) preparado por Alejandro Nadal, un reputado académico, investigador del Colegio de México. Junto con un equipo diverso y bien constituido, Nadal trazó una estrategia económica alternativa que no ha sido respondida. Tiene el aval político de centenares de miles de personas que suscribieron un resumen de la misma, apoyo que fue hecho conocer al Congreso de la Unión. Pero se sostiene por sí sola, fundada como está en criterios teóricos y técnicos de rango comparable (a veces los mismos) a los utilizados por la tecnocracia gobernante.

Igual fue el destino, y semejante la naturaleza, de un plan específicamente destinado a enfrentar el problema de las carteras vencidas, problema vigente y gravoso para los

deudores, para la banca y para el fisco, que por andar en tareas de salvamento de las instituciones financieras tiene que afilar sus uñas expoliadoras. Lo preparó El Barzón, con asesoría de expertos financieros, por lo que adquirió un tono que va más allá de la de suyo legítima, pero angustiada, voz de los que no pueden pagar lo que se les exige.

Pero hay otra fórmula para el debate, en que el gobierno podría proceder de oficio, es decir recogiendo materiales para la discusión que aunque no le hayan sido presentados directamente, se han ofrecido a la discusión pública. Abundan en los medios académicos y en los de comunicación, diagnósticos y propuestas, y mejor aún, una combinación de ambos, formulaciones alternativas a las de la administración federal. Se trata de tesis robustas, dignas de examen y de respuesta, que no han tenido ni lo uno ni lo otro. Para no ir más lejos, cito hoy un par de novedades editoriales, recién salidas de la imprenta, cuyo contenido no debería pasar inadvertido para el gobierno. Una se refiere a la concepción general de la política económica, y otra a un asunto específico, el de la petroquímica en trance de ser privatizada.

El primero es el libro ¿Transición o crisis (subtitulado “Las contradicciones de la política económica y el bienestar social”), de David Ibarra. Y el segundo, el de José Luis Manzo Yepes que se pregunta ¿Qué hacer con Pemex? Una alternativa a la privatización. Se requerirá dedicar amplio espacio a una reseña de los enfoques y propuestas correspondientes. Hoy me detengo en consideraciones sobre

los autores, ya que a priori han sido descalificados por los responsables de la política económica de hoy, y conviene refutar esa desautorización a su vez carente de autoridad.

Ninguno de los dos autores citados se basa únicamente en estudios de gabinete para sus formulaciones, sino que han vivido la experiencia administrativa correspondiente. Ibarra fue secretario de Hacienda durante algunos años del sexenio de López Portillo, y aunque no pueda evitarse el cotejo de sus propuestas de hoy con su práctica de entonces, tampoco se puede ignorar que las nuevas circunstancias, y el estudio que hace de ellas, confiere validez propia a sus planteamientos actuales. Manzo Yepes, a la inversa, convalida con sus antecedentes sus propuestas de hoy, pues durante el tiempo en que fue funcionario de Pemex publicó diversos estudios sobre la política petrolera. Por lo menos uno de ellos data de 1987, antes de que se polarizaran las posiciones políticas en que el debate se inscribe necesariamente.

Es de esperarse que, si no oyen, los funcionarios al menos lean.

cajón de sastre

El profesor Néstor Pérez Martínez se va de México. En compañía de su esposa y su hija, a los treinta años de edad y diez de servicios magisteriales, se ha dado por vencido. El magro salario que devenga como profesor en villa de Ayala, Morelos, le resulta insuficiente. Pero, según anuncia en una carta, lo agobian más que la pobreza inmediata, la frustración y la desesperanza. Quiso ser licenciado y

maestro en educación y descubrió que las becas respectivas se dan a compadres y amigos . Y teme que dentro de 30 años, su ahorro para la jubilación se esfume si quiebran las administradoras de los fondos de pensiones.¿No habrá modo de devolverle la esperanza?

indicaciones para la edición

1) Sumario

No hay discusión pública sobre la política económica porque el gobierno no quiere; en caso contrario, podría proceder de oficio, respondiendo por ejemplo a lo planteado en libros de reciente aparición, que formulan diagnósticos y propuestas diversos de los oficiales.

2) Recuadro (con foto de Juan Pablo Arroyo)

El director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, Juan Pablo Arroyo, recibió invitación el año pasado para ofrecer aportaciones al Plan Nacional de Desarrollo, pero el largo estudio que presentó apenas tuvo como respuesta un cortés acuse de recibo.